

fuesen destinados al servicio de las ar-  
mas, en virtud de las facultades extraor-  
dinarias con que estaba investido, y  
por vía de pena como reos políticos, con  
excepción de uno de ellos que fué cogi-  
do de lea; cuyas providencias que fue-  
ron ejecutadas por la Comandancia mi-  
litar, citando al primero en el cuerpo de  
Arillería que guarnece esta plaza, y lo  
otros en el batallón 3.<sup>o</sup> de Infantería, con  
violación de las garantías que les con-  
ceden los artículos 22, 16, 20 y 21 de la  
Constitución Federal.

Corridos los trámites regulares de este juicio, ha resultado por los informes emitidos por los CC. Gobernador del Estado y Comandante Militar, que son ciertos los hechos en que se apoya el proceso, y en consecuencia, que no han sido juegulos por la autoridad judicial competente, ni se les aplicó la ley de amnistía especial por el Supremo gobierno como en la de justicia; siendo de notar que las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso del Estado al ejecutivo del mismo en aquella época en los ramos de Hacienda, Guerra y Gobierno, no han sido extensivos á sus demás facultades, limitándose á las

Distrito de Ver-  
tiz y otros, con-  
tra por el Cl. de  
virtud de la cau-  
sita de las am-  
nos, pido á vd.

INDEXED TO: 100-100000

Constitución Federal otorga al hombre en la República, porque para ello no tiene poder la legislatura.

Por estas consideraciones, pido á vd. el suscrito Promotor que se sirva acompañar á los que preceden.

"THE GREAT SUNDAY, February 10 of 1974—*THE 14th Day of February.*"

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

"1 - Villalba, Jorge 19 de 1972. -  
Villalba, Juan José, María y María  
Cruz, Juan Villalba y los CC. Luis Ortiz,  
José María Basso, Esteban Estévez,  
Gabriel Pérez, Genaro Carrillo, Susana  
Conde y Hércules Barrios, N por

El Juez de Distrito  
El Promotor Fiscal  
Luis Ortiz, José  
San Martínez, G  
Carillo, Herenlar  
Conde, vecinos de  
tado nuparo y pa  
Federal, contra i  
por el Superior d  
en el año pasado  
signó, como ream  
cuerpo que lo cor

medio de su abogado defensor, contra providencias dictadas por el O. Gobernador del Estado, que los destinó al servicio de las armas, ejecutadas por la Comandancia militar de esta plaza, disponiendo que fuesen filiados en los cuerpos residentes en esta ciudad, con violación, según expresan, de las garantías que conceden al hombre los artículos 39, 16, 20 y 21 de la Constitución Federal, el informe emitido por la autoridad ejecutora del acto reclamado, del que resulta que efectivamente fueron consignados dichos individuos para filiarse en el ejército en calidad de reemplazos; las pruebas rendidas por el defensor de los quejosos en que aparece que el Gobierno del Estado los remitió como tales reemplazos, en virtud de sus facultades extraordinarias, á la Comandancia militar, con excepción de Herculano Barradas, respecto del cual debía abrirse un juicio militar como reo político; lo alegado por el mismo defensor, y lo pedido por el O. Promotor fiscal; y considerando: que los quejosos no han sido juzgados y sentenciados por la autoridad judicial competente, á sufrir la pena de ser destinados al servicio militar por alguno de los delitos definidos en el Código Penal del Estado; que el reo político Herculano Barradas, tampoco ha sido juzgado con arreglo á las leyes Federales, pues aunque fué remitido á la Comandancia militar con ese objeto, correspondía la competencia á este Juzgado de Distrito, por no estar comprendido en alguno de los casos excepcionales de la ley general que suspendió algunas garantías individuales respecto á los perturbadores de la paz pública: que aun en el caso de que hubiesen sido condenados legítimamente, ha debido aplicárseles la amnistía concedida por el Supremo Gobierno, y por último: que las facultades extraordinarias de que estuvo investido el Ejecutivo del Estado

en los ramos de Guerra, Hacienda y Gobierno, no se extendieron á la suspensión de garantías individuales, por no tener la legislatura las atribuciones necesarias para ese efecto; por cuyos fundamentos, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Constitución y de la ley de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla:

Primero: La Justicia de la Unión ampara y protege á Luis Ortiz, José María Blanco, Estéban Martínez, Gabriel Pérez, Genaro Carrillo, Susano Conde y Herculano Barradas, contra las providencias dictadas por el Gobierno del Estado, que los destinaron al servicio de las armas, y ejecutadas por la Comandancia militar de esta plaza, disponiendo que fuesen filiados en los cuerpos residentes en ella.

Segundo: Notifíquese este fallo: sáquese copia de él para su publicación en el "Progreso" y las que deban remitirse para el "Semanario Judicial" de la Federación, y elévense los autos originales á la Suprema Corte de Justicia para que sean revisados.

Así lo mandó y firmó el C. juez de Distrito del Estado: lo certificamos.—*Lic. Luis I. Gomez.*—De asistencia.—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia que certifico. Heróica Veracruz, Marzo 12 de 1873.—*Lic. Luis I. Gomez.*—De Asistencia.—*José María Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 22 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por los CC. Luis Ortiz, José María Blanco, Estéban Martínez, Gabriel Pérez, Genaro Carrillo, Susano Conde y Herculano Barradas, contra la providencia dictada por el O. Gobernador del Esta-

do, en virtud de la que son retenidos en el servicio militar. Considerando: que la consignacion de los quejosos á las filas del ejército, ha sido hecha con los requisitos y formalidades que para la aplicacion de las penas exigen los artículos 16, 20 y 21 de la Constitucion General de la República, quedando así justificados los motivos que los promovedores alegaron para acogerse al amparo de la Justicia Federal; se decreta: que por sus propios legales fundamentos, es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el O. juez de Distrito del Estado de Veracruz, fecha 19 del actual, que declara: "La Justicia de la Union ampara y protege á Luis Ortiz, José María Blanco, Estéban Martinez, Gabriel Perez, Genaro Carrillo, Susano Conde y Heroumano Barradas, contra las providencias dictadas por el Gobierno del Estado, que los destinaron al servicio de las armas, y ejecutadas por la Comandancia militar de esta plaza, disponiendo que fuesen filiados en los cuerpos residentes en ella."

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 7 de 1873.—*Licenciado Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por Estrella Castillo, Crisaca Canto y Eligia Zetina á favor de sus mulidos, contra la disposicion por la que fueron filiados en uno de los batallones residentes en Mérida.

PEDIMENTO DEL O. PROMOTOR FISCAL.

O. juez de Distrito:

El adjunto informe del O. Fiscal de causas militares, está en perfecta consonancia con el que el O. general en jefe de las fuerzas del Estado emitió sobre la suspension del acto, contra el cual se intenta el presente recurso de amparo, pues de uno y otro aparece que los quejosos José German Medina, Tomás Concha y Agustín Sib, están sometidos á un procedimiento criminal, que con jurisdiccion legítima les sigue aquel juez de instruccion, por el delito de sublevacion cometido con la circunstancia agravante de haberse llevado las armas de la federacion que se les confiaran, y á cuyo servicio estaban en calidad de guardias nacionales revistadas. Por este motivo se les ha declarado bien presos; y solo en el caso de que no se hubiese provisto el auto de su formal prision dentro de los tres dias que prefiija el art. 18 de la Constitucion, podria decirse violada esta garantía; pero ni el amparo invocado se funda en la violacion de ella, ni puede fundarse toda vez que el informe acumulado á continuacion demuestra que se ha cumplido con esa garantía consignada en el Pacto Federal. Resultando, en consecuencia, que no existe el acto de la filiacion contra el cual se quejaron los expresados CC. Medina, Concha y Sib, el Fiscal con fundamento de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. Pido á vd. declare sin lugar el amparo solicitado contra él.

Mérida, Febrero 20 de 1873.—*P. Hijuelos.*

Es copia que certifico. Mérida, Marzo 8 de 1873.—*Prudencio Hijuelos.*